No. 38071

Argentina
and
Chile

Convention on social security between the Republics of Argentina and Chile. Antofagasta, 17 October 1971

Entry into force: *1 June 1972, in accordance with article 24*

Authentic text: *Spanish*

Registration with the Secretariat of the United Nations: *Argentina, 16 January 2002*

Argentine
et
Chili

Convention de séeurité sociale entre les Républiques d'Argentine et du Chili. Antofagasta, 17 oetobre 1971

Entrée en vigueur : *1er juin 1972, conformément à l'article 24*

Texte authentique : *espagnol*

Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : *Argentine, 16 janvier 2002*

[SPANISH TEXT — TEXTE ESPAGNOL]

CONVENIO SOBRE SEGURIDAD SOCIAL ENTRE LAS REPUBLICAS DE ARGENTINA Y CHILE

El Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de la República de Chile,

TENIENDO PRESENTE, el espíritu de la Declaración Conjunta formulada en Salta por los Presidentes de ambas Naciones, el 24 de julio de 1971 y reconocida la conveniencia recíproca de determinar los derechos de los trabajadores de ambos países en el campo de la Seguridad Social en sus respectivos territorios y las condiciones en que se ejercen,

HAN RESUELTO celebrar un Convenio y, con este fin, nombraron sus Plenipotenciarios:

El Presidente de la Nación Argentina a sus Ministros de Relaciones Exteriores y Culto, Su Excelencia el Doctor Luis María de Pablo Pardo y de Bienestar Social, Su Excelencia Don Francisco Guillermo Manrique; y

El Presidente de la República de Chile a sus Ministros de Relaciones Exteriores, Su Excelencia Don Clodomiro Almeyda y de Trabajo y Previsión Social, Su Excelencia Don José Oyarce Jara.

Quienes después de comunicarse los respectivos Plenos Poderes que fueron hallados en buena y debida forma, convinieron lo siguiente:

TITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 1º.- El presente Convenio se aplicará a los trabajadores chilenos en la República Argentina y a los trabajadores argentinos en la República de Chile, y a sus causahabientes, cualesquiera fueren la nacionalidad y lugar de residencia de éstos.

ARTICULO 2º.- En este Convenio se entiende por:

a) Autoridad competente: Los Ministerios o Secretarías de Estado que en cada Parte Contratante tengan competencia sobre los regímenes de seguridad social

b) Entidad gestora: Las instituciones que en cada Parte Contratante tengan a su cargo la administración de uno o más regímenes de seguridad social.

c) Disposiciones legales: Las leyes, decretos, reglamentos y demás disposiciones relativas a las materias enumeradas en el artículo siguiente, vigentes en el territorio de cada una de las Partes Contratantes.

ARTICULO 3º.- El presente Convenio se aplicará:

A) En Chile:

A las disposiciones legales que se refieren a:

a) Régimen del Servicio de Seguro Social;

b) Sistema de empleados particulares, con sus regímenes especiales;

c) Régimen general de empleados públicos;

d) Régimen de periodistas.

B) En Argentina:

A las disposiciones legales que se refieren a:

a) Régimen de jubilaciones y pensiones;

b) Régimen de asignaciones familiares.

ARTICULO 4º.- El presente Convenio se aplicará asimismo a todas las disposiciones legales que en lo futuro modifiquen o complementen las enumeradas en el artículo anterior. Sin embargo, no se aplicará a las disposiciones legales que instituyan nuevos regímenes de seguridad social, salvo acuerdo de las autoridades competentes.

ARTICULO 5º.- Los nacionales de una de las Partes Contratantes a quienes se apliquen las disposiciones de este Convenio, quedarán sujetos a las mismas obligaciones y tendrán iguales derechos que los nacionales de la otra Parte.

Se exceptúan de lo dispuesto en el párrafo anterior:

a) Los miembros de las representaciones diplomáticas y consulares, y demás funcionarios, empleados y trabajadores al servicio de esas representaciones o al servicio personal de algunos de sus miembros, los que se regirán por las convenciones y tratados que les sean aplicables.

b) El nacional de una de las Partes Contratantes enviado por una empresa con sede en ella, al territorio de la otra Parte, seguirá regido por las disposiciones legales de la primera, siempre que la permanencia en el país receptor no fuere superior a doce meses. Si se excediere

dicho plazo, el trabajador podrá continuar regido por esas disposiciones legales, siempre que la Autoridad competente del país receptor prestare conformidad.

Las autoridades competentes podrán ampliar suprimir o modificar, en casos particulares o para determinadas categorías profesionales, las excepciones enumeradas en los incisos precedentes.

ARTICULO 6º.- Las prestaciones económicas acordadas en virtud de las disposiciones legales de una de las Partes Contratantes, comprendidos sus aumentos y mejoras, no podrán ser objeto de reducción, suspensión o extinción por el hecho de que el beneficiario resida en el territorio de la otra Parte Contratante.

Las prestaciones económicas de la seguridad social a cargo de una de las Partes Contratantes se pagarán a los nacionales de la otra Parte que residan en el territorio de un tercer Estado, en las mismas condiciones e igual cuantía que a los nacionales de la primera que tuvieren su residencia en ese tercer Estado.

ARTICULO 7º.- Los organismos de una Parte Contratante que en virtud del presente Convenio sean deudores de prestaciones económicas a los beneficiarios que se encuentren en el territorio de la otra Parte, se liberarán válidamente mediante el pago en moneda de la primera Parte.

TITULO II

DISPOSICIONES PARTICULARES

CAPITULO I

Prestaciones médicas en caso de maternidad y enfermedad

ARTICULO 8º.- Los trabajadores chilenos en el territorio de la República Argentina tendrán el mismo trato que se acuerde a los nacionales del país receptor en lo relativo a las prestaciones médicas por maternidad y enfermedad. Asimismo, lo tendrán en lo relativo a estas prestaciones previstas o establecidas en el régimen laboral del país receptor.

Los trabajadores argentinos en el territorio de la República de Chile tendrán los mismos derechos que las disposiciones legales de seguro social y asistencia social establecen para los nacionales del país receptor.

CAPITULO II

Prestaciones por accidentes del trabajo y enfermedades profesionales

ARTICULO 9º.- Los nacionales de cada una de las Partes contratantes a quienes se aplique el presente Convenio, tendrán en el país receptor los mismos derechos que los nacionales de este país, en lo que concierne al régimen de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales.

CAPITULO III

Prestaciones familiares

ARTICULO 10º.- Lo dispuesto en el artículo anterior regirá también respecto de las prestaciones familiares que establecen las disposiciones legales del país receptor, siempre que las personas que generen dichas prestaciones residan en este país.

CAPITULO IV

Del seguro social de vejez, invalidez y muerte

ARTICULO 11º.- Los nacionales de cada una de las Partes Contratantes tendrán en el país receptor los mismos derechos y estarán sujetos a iguales obligaciones que los nacionales de este país, respecto de los regímenes de vejez, invalidez y muerte.

ARTICULO 12º.- Los trabajadores argentinos o chilenos que hayan estado sujetos sucesiva o alternativamente a la respectiva legislación de las dos Partes Contratantes, tendrán derecho a la totalización de los períodos computables en virtud de las disposiciones legales de cada una de ellas, siempre que no sean simultáneos. El cómputo de los períodos correspondientes se regirá por las disposiciones legales del país que deba practicarlo.

ARTICULO 13º.- Cada entidad gestora determinará con arreglo a su legislación y teniendo en cuenta la totalización de períodos, si el interesado cumple las condiciones requeridas para obtener las prestaciones.

En caso afirmativo, determinará el importe o haber de las prestaciones a que el interesado tendría derecho si todos los períodos totalizados se hubieran cumplido bajo su propia legislación, y reducirá el mismo en proporción a los períodos cumplidos, exclusivamente, bajo dicha legislación.

ARTICULO 14º.- El derecho a prestaciones de quienes, teniendo en cuenta la totalización de períodos computables, no cumplan al mismo tiempo las condiciones exigidas por las disposiciones legales de ambas Partes Contratantes, se determi

nará con arreglo a las disposiciones de cada una de ellas a medida que se vayan cumpliendo dichas condiciones.

Los interesados podrán optar porque los derechos sean reconocidos conforme con las reglas del artículo anterior o separadamente de acuerdo con las disposiciones legales de una Parte Contratante con independencia de los períodos computables en la otra Parte.

ARTICULO 15º.- Las disposiciones del presente Convenio sobre totalización de períodos computables en cada una de las Partes Contratantes, no se aplicarán respecto de los regímenes de pensiones de jubilación por antigüedad o años de servicios y por término obligado de funciones, establecidos en la legislación de la República de Chile.

CAPITULO III

DISPOSICIONES FINALES

ARTICULO 16º.- Las solicitudes, declaraciones o recursos que deban ser presentados por aplicación de las disposiciones legales de una de las Partes Contratantes, en un plazo determinado, ante un organismo de esta Parte, serán admitidos si se presentaren dentro de dicho plazo ante un organismo correspondiente de la otra Parte. En este caso, el organismo interviniente trasmitirá de inmediato esas solicitudes, declaraciones o recursos al de la otra Parte, por intermedio de los organismos de enlace.

ARTICULO 17º.- Todos los actos, documentos, gestiones y escritos relativos a la aplicación de este Convenio, los acuerdos administrativos y demás instrumentos adicionales, quedan exentos del tributo de sellos o timbres y estampillas, como

también de la obligación de visación o legalización por parte de las autoridades diplomáticas o consulares, bastando la certificación del respectivo organismo de enlace.

ARTICULO 18º.- Las autoridades competentes establecerán los acuerdos administrativos y demás instrumentos adicionales que fueren menester para la aplicación del presente Convenio.

ARTICULO 19º.- Para los efectos de la aplicación administrativa del presente Convenio y de los acuerdos administrativos y demás instrumentos adicionales a que se refiere el artículo anterior, se establecen como organismos de enlace:

En la República de Chile, la Superintendencia de Seguridad Social.

En la República Argentina: El Servicio Tratados de Reciprocidad del Ministerio de Bienestar Social.

Las autoridades competentes de cada una de las Partes podrán establecer otros organismos de enlace, comunicándolo a la autoridad competente de la otra Parte.

ARTICULO 20º.- Los organismos de enlace se comprometen a intercambiar informaciones relacionadas con las medidas adoptadas para la mejor aplicación de este Convenio, los acuerdos administrativos y demás instrumentos adicionales, y sobre nuevas disposiciones legales que modifiquen o complementen los regímenes de seguridad social enumerados en el artículo 3º, como también a realizar todos los actos de control que se soliciten recíprocamente, bastando a ese efecto la comunicación directa entre ellos.

ARTICULO 21º.- Las autoridades competentes constituirán una Comisión Mixta de Expertos integrada por tres representantes de cada Parte Contratante, la que tendrá por cometido asesorar a dichas autoridades cuando éstas lo requieran o por propia iniciativa, en lo concerniente a la aplicación del presente Convenio, de los acuerdos administrativos y demás documentos adicionales que se establezcan, y toda otra función atinente a dichos documentos, que de común acuerdo resuelvan asignarle las autoridades competentes.

ARTICULO 22º.- Las autoridades competentes resolverán de común acuerdo y previo informe de la Comisión Mixta de Expertos, las diferencias que pudieran surgir en la aplicación del presente Convenio y de los acuerdos administrativos y demás documentos adicionales que se establezcan.

ARTICULO 23º.- El presente Convenio podrá ser denunciado por cualquiera de las Partes Contratantes, mediante denuncia por escrito notificada por el Gobierno de esa Parte al de la otra, con una antelación de seis meses.

En caso de denuncia, las disposiciones de este Convenio seguirán rigiendo respecto de los derechos ya adquiridos. Las situaciones determinadas por derechos en vías de adquisición al momento de la extinción del Convenio, serán reguladas de común acuerdo por las Partes Contratantes.

ARTICULO 24º.- Los instrumentos de ratificación serán canjeados en la Ciudad de Buenos Aires.

Este Convenio entrará en vigor el primer día del segundo mes siguiente al del canje de los Instrumentos de Ratificación.

EN FE DE LO CUAL, los Plenipotenciarios arriba nombrados, firmaron el presente Convenio, en dos ejemplares de un mismo tenor y les pusieron sus respectivos sellos en la Ciudad de Antofagasta, República de Chile, a los diez y siete días del mes de octubre del año mil novecientos setenta y uno.

Por el Gobierno de la República Argentina

Por el Gobierno de la República de Chile

[TRANSLATION -- TRADUCTION]

CONVENTION ON SOCIAL SECURITY BETWEEN THE ARGENTINE REPUBLIC AND THE REPUBLIC OF CHILE

The Government of the Argentine Republic and the Government of the Republic of Chile,

Recalling the spirit of the joint declaration adopted in Salta by the Presidents of the two nations on 24 July 1971 and recognizing that it is in their mutual interest to define the rights of workers of both countries with regard to social security and the conditions for the exercise of those rights in their respective territories,

Have decided to conclude a Convention and have appointed their Plenipotentiaries for that purpose:

The President of the Argentine Republic: His Excellency Dr. Luis María de Pablo Pardo, Minister for Foreign Affairs and Worship, and His Excellency

Mr. Francisco Guillermo Manrique, Minister of Social Welfare; and

The President of the Republic of Chile: His Excellency Mr. Clodomiro Almeyda, Minister for Foreign Affairs, and His Excellency Mr. José Oyarce Jara, Minister of Labour and Social Security;

Who, having exchanged their full powers, found to be in good and due form, have agreed as follows:

TITLE I. GENERAL PROVISIONS

Article 1

This Convention shall apply to Chilean workers in the Argentine Republic and to Argentine workers in the Republic of Chile and to their successors, whatever the nationality or place of residence of the latter.

Article 2

For the purposes of this Convention:

(a) Competent authority means the Ministries or Secretariats of State in each Contracting Party which are responsible for the social security regimes;

(b) Insurance authority means the institutions in each Contracting Party which administer one or more social security regimes;

(c) Legislation means the laws, decrees, regulations and other provisions relating to the matters specified in the following article which are in force in the territory of each Contracting Party.

Article 3

This Convention shall apply:

(A) In Chile; to the legislation relating to:

(a) Regime of the social security service;

(b) System for private employees, with their special regimes;

(c) General regime for public employees;

(d) Regime for journalists;

(B) In Argentina; to the legislation relating to:

(a) Retirement and pension regime;

(b) Family allowances regime.

Article 4

This Convention shall also apply to all legislation by which the provisions specified in the article above may be amended or supplemented in the future. It shall not, however, apply to legislation instituting new social security regimes except with the agreement of the competent authorities.

Article 5

Nationals of one of the Contracting Parties to whom the provisions of this Convention apply shall have the same rights and obligations as nationals of the other Party.

The following shall be exempted from the preceding provision:

(a) Members of diplomatic and consular missions, and other officials, employees and workers on the staff of those missions or in the private employ of an official of those missions, who shall be governed by the conventions and treaties applicable to them;

(b) A national of one of the Contracting Parties employed by an enterprise with its headquarters in that Contracting Party and sent to the territory of the other Party, shall continue to be subject to the legislation of the former, provided that his or her stay in the receiving country does not exceed twelve months. If his or her stay exceeds twelve months, the worker may continue to be subject to the same legislation if the competent authority of the receiving country agrees.

The competent authorities may expand, cancel or amend the exceptions specified above in special cases or for particular occupational groups.

Article 6

The cash bencfits granted under the legislation of one of the Contracting Parties, including any increases and improvements, may not be reduced, suspended or cancelled by

virtue of the fact that the beneficiary is a resident in the territory of the other Contracting Party.

The social security cash benefits which are the responsibility of one of the Contracting Parties shall be paid to nationals of the other Party residing in the territory of a third State on the same conditions and in an equivalent amount as for nationals of the former residing in the third State.

Article 7

Entities of one Contracting Party who, pursuant to this Convention, owe cash benefits to beneficiaries in the territory of the other Party, shall pay any sum owed in the currency of the former Party.

TITLE II. SPECIAL PROVISIONS

CHAPTER I. MEDICAL MATERNITY AND SICKNESS BENEFITS

Article 8

Chilean nationals working in the territory of the Argentine Republic shall enjoy the same treatment as that granted to nationals of the receiving country with regard to medical maternity and sickness benefits. They shall also enjoy the same treatment with regard to benefits provided for or established in the labour regime of the receiving country.

Argentine nationals working in the territory of the Republic of Chile shall enjoy the same benefits as those established for nationals of the receiving country in legislation of that country relating to social security and social welfare.

CHAPTER II. BENEFITS IN THE EVENT OF INDUSTRIAL ACCIDENTS AND OCCUPATIONAL DISEASES

Article 9

The nationals of each of the Contracting Parties to whom this Convention applies shall have the same rights in the receiving country as nationals of the latter with regard to the regime concerning industrial accidents and occupational diseases.

CHAPTER III. FAMILY ALLOWANCES

Article 10

The provisions of the preceding article shall also apply to family allowances established in the legislation of the receiving country, provided that the individuals receiving such allowances reside in that country.

CHAPTER IV. OLD-AGE, DISABILITY AND DEATH BENEFITS

Article 11

Nationals of either Contracting Party shall have the same rights and obligations in the receiving country as nationals of that country with regard to old-age, disability and death benefits.

Article 12

Argentine or Chilean workers who have been successively or alternately subject to the respective legislation of the two Contracting Parties shall be entitled to the aggregation of the insurance periods in accordance with the legislation of each Party, provided that the periods are not simultaneous. The calculation of the periods in question shall be governed by the legislation of the Party whose responsibility it is to make the calculation.

Article 13

Each administrative entity shall determine, in accordance with its legislation and taking into account the aggregated periods, whether the individual meets the necessary conditions for entitlement to benefits.

If he is entitled, it shall determine the amount of the benefits to which the individual would be entitled if all the aggregated periods had been completed under its own legislation, and shall reduce that amount in proportion to the periods completed exclusively under that legislation.

Article 14

The entitlement to benefits of an individual who, taking into aceount the aggregated insurance periods, does not meet the conditions set out in the legislation of the two Contracting Parties, shall be determined in accordance with the legislation of each Party insofar as those requirements are met.

The individual concerned may opt to have his or her entitlement recognized in accordance with the rules specified in the preceding article, or separately pursuant to the legislation of one Contracting Party independently of any insurance periods completed in the other Party.

Article 15

The provisions of this Convention relating to the aggregation of insurance periods in each of the Contracting Parties shall not apply to retirement pension regimes based on seniority or years of service or on mandatory retirement established under the legislation of the Republic of Chile.

CHAPTER V. FINAL PROVISIONS

Article 16

Requests, declarations or appeals which must, in accordance with the legislation of one of the Contracting Parties, be submitted within a specific time limit, to an entity of that Party shall be accepted if they are submitted within that time limit to a corresponding entity of the other Party. In that event, the intermediary entity shall immediately transmit the said requests, declarations or appeals to the corresponding entity in the other Party, through the liaison bodies.

Article 17

Any certificates, documents, records and petitions relating to the implementation of this Convention, as well as any administrative agreements and other additional instruments, shall be exempt from fees for seals or fiscal or revenue stamps and from the requirement for notarization or authentication by a diplomatic or consular authority; authentication by the respective liaison body shall suffice.

Article 18

The competent authorities shall draw up the administrative agreements and any other additional instruments required for the implementation of this Convention.

Article 19

For the purposes of the administrative implementation of this Convention and the administrative agreements and other additional instruments referred to in the preceding article, the following liaison bodies shall be established:

In the Republic of Chile, the Office of the Superintendent for Social Security (Superintendencia de Seguridad Social).

In the Argentine Republic: the Reciprocity Treaty Service (Servicio Tratados de Reciprocidad) of the Ministry of Social Welfare.

The competent authorities of each Party may establish other liaison bodies and shall inform the competent authority of the other Party accordingly.

Article 20

The liaison bodies undertake to exchange information relating to the measures adopted for the better implementation of this Convention, and the administrative agreements and other additional instruments, and to any new legislation which might amend or supplement the social security regimes listed in article 3. They shall also carry out investigations at each other's request, any such requests being transmitted directly to each other.

Article 21

The competent authorities shall establish a Joint Commission of Experts composed of three representatives from each Contracting Party. It shall be responsible for advising the said authorities upon request or upon its own initiative with regard to the implementation of this Convention and the administrative agreements and any other additional instruments which may be adopted, and with regard to any matters relating thereto as the competent authorities may request by mutual agreement.

Article 22

The competent authorities shall settle by mutual agreement any differences that may arise with regard to the implementation of this Convention and the administrative agreements and any other additional instruments which may be adopted, and shall inform the Joint Commission of Experts accordingly.

Article 23

This Convention may be denounced by either Contracting Party if the Government of that Party provides six months' written notice thereof to the Government of the other Party.

In the event of denunciation, the provisions of this Convention shall continue to apply to rights already acquired. In situations where rights are in the process of being acquired at the time of the termination of the Convention, a final determination shall be made by mutual agreement of the Contracting Parties.

Article 24

The instruments of ratification shall be exchanged in the city of Buenos Aires.

This Convention shall enter into force on the first day of the second month following the date of exchange of the instruments of ratification.

In testimony whereof, the aforementioned Plenipotentiaries have signed this Convention in two copies, both being equally authentic, and have thereto affixed their seals, in the eity of Antofagasta, Republic of Chile, on 17 October 1971.

For the Government of the Argentine Republic:

LUIS MARÍA DE PABLO PARDO
Minister for Foreign Affairs and Worship

FRANCISCO GUILLERMO MANRIQUE
Minister of Social Security

For the Government of the Republic of Chile:

CLODOMIRO ALMEYDA
Minister for Foreign Affairs

JOSÉ OYARCE JARA
Minister of Labour and Social Security

[TRANSLATION -- TRADUCTION]

CONVENTION RELATIVE À LA SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LA RÉPUBLIQUE ARGENTINE ET LA RÉPUBLIQUE DU CHILI

Le Gouvernement de la République argentine et le Gouvernement de la République du Chili,

Soucieuses de préserver l'esprit de la Déclaration conjointe formulée par les Présidents des deux Nations le 24 juillet 1971 et reconnaissant qu'il est de leur intérêt mutuel de déterminer les droits des travailleurs des deux pays dans le domaine de la Sécurité soeiale sur leurs territoires respectifs et les conditions dans lesquelles ils s'exercent,

Sont convenues de conclure une Convention et, à cette fin, ont nommé leurs plénipotentiaires, à savoir :

Le Président de la Nation argentine, son Ministre des relations extérieures et du culte, M. Luis María de Pablo Pardo, et son Ministre des affaires sociales, M. Francisco Guillermo Manrique; et

Le Président de la République du Chili, son Ministre des relations extérieures, M. Clodomiro Alemeyda et son Ministre du travail et de la prévoyance sociale, M. José Oyarce Jara.

Lesqucls, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, qui ont été trouvés en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit :

TITRE PREMIER. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

La présente Convention s'applique aux travailleurs chiliens en République argentine et aux travailleurs argentins en République du Chili, ainsi qu'à leurs ayants-droit, quels que soient leur nationalité et leur lieu de résidence.

Article 2

Aux fins de la présente Convention :

a) L'expression " Autorité compétente " désigne les Ministères ou Secrétariats d'État de chaque Partie contractante ayant compétence en ce qui concerne les régimes de sécurité sociale.

b) L'expression " Organe de gestion " désigne les institutions de chaque Partie contractante chargées de la gestion d'un ou de plusieurs régimes de sécurité sociale.

c) L'expression " dispositions légales " désignent les lois, décrets, règlements et autres dispositions relatives aux matières énumérées à l'article suivant, en vigueur sur le territoire de chacune des Parties contractantes.

Article 3

La présente Convention s'applique :

A. Au Chili :

Aux dispositions légales relatives :

a) au Régime du Service de Sécurité sociale;

b) aux catégories d'employés faisant l'objet de régimes spéciaux;

c) au régime général des employés des services publics;

d) au régime des journalistes.

B. En Argentine

Aux dispositions légales relatives :

a) au régime des retraites et pensions;

b) au régime des allocations familiales.

Article 4

La présente Convention s'applique également à toutes les dispositions légales qui modifieront ou complcteront à l'avenir les dispositions énumérées à l'article précédent. Toutefois, sauf accord des autorités compétentes, elle ne s'applique pas aux dispositions légales qui instituent de nouveaux régimes de sécurité sociale.

Article 5

Les ressortissants de l'une des Parties contractantes auxquels s'appliquent les dispositions de la présente Convention restent assujettis aux mêmes obligations et ont les mêmes droits que les ressortissants de l'autre Partie.

Font exception aux dispositions du paragraphe précédent :

a) les membres des représentations diplomatiques et consulaires et autres fonctionnaires employés et travaillant au service de ces représentations ou au service personnel de certains de leurs membres, qui sont régis par les conventions et traités qui leur sont applicables;

b) tout ressortissant de l'une ou l'autre des Parties contractantes envoyé sur le territoire de l'autre Partie par une entreprise ayant son siège sur le territoire de la première Partie, lequel reste régi par les dispositions légales de ladite première Partie, sous réserve que son séjour dans le pays récepteur ne dépasse pas deux mois. Si son séjour dépasse ce délai, le travailleur peut continuer à être régi par ces dispositions légales, sous réserve de l'agrément de l'autorité compétente du pays récepteur.

Les autorités compétentes peuvent étendre, supprimer ou modifier, dans certains cas particuliers et pour des catégories professionnelles déterminées, les exceptions énumérées aux alinéas précédents.

Article 6

Les prestations financières accordées en vertu des dispositions légales de l'une des Parties contractantes, y compris leurs augmentations et améliorations, ne peuvent faire l'objet de réduction, suspension ou extinction par le fait que le bénéficiaire a son domicile sur le territoire de l'autre Partie contractante.

Les prestations financières de la sécurité sociale à la charge de l'une des Parties contractantes sont versées aux ressortissants de l'autre Partie qui ont leur domicile sur le territoire d'un État tiers, aux mêmes conditions et à concurrence des mêmes montants qu'aux ressortissants de la première Partie contractante ayant leur domicile sur le territoire dudit État tiers.

Article 7

Les organismes d'une Partie contractante qui, en vertu de la présente Convention, sont débiteurs de prestations financières aux bénéficiaires se trouvant sur le territoire de l'autre Partie se libèrent valablement de leur dette par le paiement desdites prestations dans la monnaie de la première Partie.

TITRE II. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

CHAPITRE PREMIER. PRESTATIONS MÉDICALES EN CAS DE MATERNITÉ ET DE MALADIE

Article 8

Les travailleurs chiliens exerçant sur le territoire de la République argentine bénéficient du même traitement que celui accordé aux ressortissants du pays récepteur en ce qui concerne les prestations médicales de maternité et de maladie. Ils bénéficient également des prestations prévues ou établies par le régime professionnel du pays récepteur.

Les travailleurs argentins exerçant sur le territoire de la République du Chili bénéficient des mêmes droits que ceux qu'accordent les dispositions légales en matière de sécurité sociale et d'assistance sociale aux ressortissants du pays récepteur.

CHAPITRE II. PRESTATIONS POUR ACCIDENT DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES

Article 9

Les ressortissants de chacune des Parties contractantes auxquels s'appliquent les dispositions de la présente Convention ont les mêmes droits dans le pays récepteur que les ressortissants de ce pays en ce qui concerne le régime des accidents du travail et des maladies professionnelles.

CHAPITRE III. PRESTATIONS FAMILIALES

Article 10

Les dispositions de l'article précédent s'appliquent également aux prestations familiales qu'établissent les dispositions légales du pays récepteur, à condition que les bénéficiaires aient leur domicile dans ce pays.

CHAPITRE IV. ASSURANCE VIEILLESSE, INVALIDITÉ ET DÉCÈS

Article 11

Les ressortissants de chacune des Parties contractantes bénéficient dans le pays récepteur des mêmes droits et sont assujettis aux mêmes obligations que les ressortissants de ce pays, en ce qui concerne les régimes d'assurance vieillesse, invalidité et décès.

Article 12

Les travailleurs argentins ou chiliens qui ont été assujettis successivement ou alternativement à la législation des deux Parties contractantes ont droit à totaliser les périodes comptables en vertu des dispositions légales de chacune d'entre elles, sous réserve qu'il n'y ait pas simultanéité. Le calcul des périodes en question est régi par les dispositions légales du pays qui devra le faire.

Article 13

Chaque organe de gestion détermine, conformément à sa législation et en tenant compte de la totalisation des périodes, si l'intéressé remplit les conditions requises pour obtenir les prestations.

Dans l'affirmative, il détermine le montant des prestations auxquelles l'intéressé aurait droit s'il avait accumulé toutes les périodes totalisées sous sa propre législation, et il ramène ce montant à la proportion des périodes effectuées exclusivement sous ladite législation.

Article 14

Le droit à prestations des personnes qui, compte tenu des périodes comptables totalisées, ne remplissent pas en même temps les conditions exigées par les dispositions légales des deux Parties contractantes, est déterminé conformément aux dispositions de chacune des deux Parties à mesure que ces conditions sont remplies.

Les intéressés peuvent opter pour que les droits soient reconnus conformément aux règles de l'article précédent ou séparément, conformément aux dispositions légales d'une Partie contractante indépendamment des périodes imputables à l'autre Partie.

Article 15

Les dispositions de la présente Convention relatives à la totalisation des périodes imputables à chacune des Parties contractantes ne s'appliquent pas aux régimes des pensions de retraite pour ancienneté ou années de service ou pour cessation obligatoire de fonctions établis par la législation de la République du Chili.

CHAPITRE V. DISPOSITIONS FINALES

Article 16

Les demandes, déclarations ou actes introductifs de recours qui doivent être présentés en application des dispositions légales dc l'une des Parties contractantes, dans un délai déterminé, devant un organisme de ladite Partie, sont admis s'ils sont présentés dans le délai prévu devant un organisme correspondant de l'autre Partie. Dans ce cas, l'organisme intervenant transmet immédiatement ces demandes, déclarations ou actes introductifs de recours à l'autre Partie, par l'intermédiaire des organes de liaison.

Article 17

Tous les actes, documents, démarches et écrits relatifs à l'application de la présente Convention, les accords administratifs et autres instruments additionnels sont dispensés du droit de timbre ou des timbres et cachets, ainsi que de l'obligation de visa ou de légalisation de la part des autorités diplomatiques ou consulaires, le certificat de l'organe de liaison étant jugé suffisant.

Article 18

Les autorités compétentes établissent les accords administratifs et autres instruments additionnels nécessaires à l'application de la présente Convention.

Article 19

Aux fins de l'application administrative de la présente Convention et des accords administratifs et autres instruments additionnels visés à l'article précédent, sont établis comme organes de liaison :

En République du Chili, la Direction de la Sécurité sociale;

En Républiqc argentine, le Service des Traités de réciprocité du Ministère des affaires sociales.

Les autorités compétentes de chacune des Parties peuvent établir d'autres organes de liaison, à condition d'en informer l'autorité compétente de l'autre Partie.

Article 20

Les organes de liaison s'engagent à échanger des informations sur les mesures prises pour une meilleure application de la présente Convention, des accords administratifs et autres instruments additionnels, et sur les nouvelles dispositions légales qui modifient ou complètent les régimes de sécurité sociale énumérés à l'article 3, et à prendre toutes les mesures de contrôle demandées de part et d'autre, une communication directe entre eux étant suffisante à cet effet.

Article 21

Les autorités compétentes constituent une Commission mixte d'experts composée de trois représentants de chaque Partie contractante, qui a pour mission de conseiller lesdites autorités quand celles-ci le demandent ou de leur propre initiative, en ce qui concerne l'application de la présente Convention, des accords administratifs et autres instruments additionnels, et d'exercer toute autre fonction en rapport avec ces documents que les autorités compétentes décident d'un commun accord de leur confier.

Article 22

Les autorités compétentes règlent d'un commun accord et sur rapport de la Commission mixte d'experts, les différends qui pourraient surgir dans l'application de la présente Convention et des accords administratifs et autres documents additionnels établis.

Article 23

La présente Convention peut être dénoncée par l'une ou l'autre des Parties contractantes, par voie de notification écrite du Gouvernement de ladite Partie à celui de l'autre, moyennant un préavis de six mois.

En cas de dénonciation, les dispositions de la présente Convention reste applicable en ce qui concerne les droits acquis. Les situations créées par des droits en voie d'acquisition au moment de l'extinction de la présente Convention sont régies d'un commun accord par les Parties contractantes.

Article 24

Les instruments de ratification sont échangés dans la ville de Buenos Aires.

La présente Convention entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit l'échange des Instruments de ratification.

En foi de quoi, les plénipotentiaires susnommés ont signé la présente Convention en deux exemplaires de même teneur et y ont apposé leurs cachets respectifs dans la ville d'Antofagasta, le dix-sept octobre mil neuf eent soixante et onze.

Pour le Gouvernement de la République argentine :
Le Ministre des relations extérieures et du culte,

LUIS MARÍA DE PABLO PARDO
Le Ministre des affaires sociales,

FRANCISCO GUILLERMO MANRIQUE

Pour le Gouvernement de la République du Chili :
Le Ministre des relations extérieures,

CLODOMIRO ALMEYDA
Le Ministre du travail et de la prévoyance soeiale,

JOSÉ OYARCE JARA